

¿ES POSIBLE UNA PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONSCIENTE Y RAZONADA EN LA ORGANIZACIÓN DE LAS ELECCIONES. EN UN CONTEXTO SOCIAL E HISTÓRICO DE POBREZA, MARGINACIÓN Y EDUCACIÓN DEFICIENTE DE AMPLIOS SECTORES DE LA POBLACIÓN DE NUESTRO PAÍS?

Juan Carlos Castañeda Cerda

En la Grecia antigua, creadora de la democracia, la participación de todos los integrantes de la sociedad estaba limitada. Es decir, las mujeres, los jóvenes y los esclavos no formaban parte en la construcción de la democracia y muchos menos de su ejercicio, porque estaban excluidos. Por lo tanto desde entonces, sino existen las condiciones de igualdad para todos los ciudadanos, difícilmente se logra una sociedad verdaderamente democrática.

En nuestro país, sí, bien es cierto que teóricamente y en la practica ningún ciudadano es excluido legalmente de la participación de uno de los elementos fundamentales de la democracia como lo son las elecciones, en los hechos sí existe la exclusión por otras causas.

La pobreza y la marginación, así como una educación deficiente forman parte de los factores que determinan la exclusión. Sus consecuencias son la segregación de un amplio número de ciudadanos de la participación que pudieran tener en la organización de las elecciones, originándose con ello una practica democrática deficiente, que se traduce en el retardo de la construcción una sociedad verdaderamente democrática.

Los mexicanos contamos con una larga experiencia en este sentido, la duración de un partido de estado por muchos años apoderado del poder, ejemplifican esta aseveración.

Ya que durante su permanencia en el gobierno mediante la manipulación de las condiciones de pobreza y la falta de educación de amplios sectores de nuestra sociedad, pudo organizar para su beneficio las elecciones que le permitieron mantenerse en el poder por más de 70 años durante la mayor parte del siglo XX. Entonces, sí bien es cierto que los ciudadanos somos creadores, beneficiarios y modificadores de procesos de elección mediante los cuales buscamos mejores formas de convivencia social, estos pueden en un momento dado ser manipulados.

Construir una democracia através de elecciones libres necesita de una igualdad social, es decir no se puede hablar de democracia si las condiciones de participación de los ciudadanos no son las mismas. Podrá decirse que el estado de derecho establece los mecanismos legales mediante los cuales todos los integrantes de la sociedad tienen derecho a participar, sin embargo si no existen las condiciones de igualdad económica y educativa difícilmente la igualdad en la participación electoral será pareja.

Este es el gran reto a superar que tenemos los mexicanos para poder equiparnos a las democracias avanzadas. Es cierto, no se puede negar el gran avance que en nuestro país se ha dado en materia electoral a partir de las reformas logradas, en el año de 1977 durante el gobierno López-Portillista, en las que aparecieron por primera vez formas de participación ciudadana y en las que se dijo en la exposición de motivos, "han, probado su eficacia en estados que disponen de vigorosas instituciones democráticas: el referéndum y la iniciativa popular", hasta lograr la total autonomía que actualmente disfruta el IFE, del control del gobierno. Avance de tal magnitud que nos permitió arribar a un cambio de gobierno, a la alternancia en el poder durante el año 2000.

Situación que sin embargo dista mucho de que nos permita aseverar que vivimos en un nuevo régimen verdaderamente democrático. Para arribar a este se necesita como condición fundamental que todos los ciudadanos mexicanos cuenten con mejores condiciones de vida, que la pobreza sea realmente abatida, es decir que las condiciones económicas permitan a todos contar con los satisfactores necesarios para vivir. Con ello se abatiría la manipulación de la consciencia de los pobres que en la realidad aún se practica. Pero además no solo necesitamos erradicar la pobreza, sino que debemos lograr que la educación ciudadana se traduzca en la toma de decisiones sociales razonadas. No es lo mismo participar en las elecciones y en la construcción de órganos de gobierno, teniendo una información en calidad y cantidad suficientes que nos permitan tomar decisiones inteligentes, que a participar de forma manipulada y con un gran desconocimiento de las cosas.

Es necesario que al momento de la participación ciudadana en las elecciones y por ende en la integración de los órganos electorales que todos los ciudadanos lo hagan en igualdad de condiciones económicas y sociales. Lo cual les permita ser imparciales, independientes, autónomos con la disposición suficiente para prestar un servicio con la confianza depositada en ellos (quienes sean elegidos) sabiendo que se están manejando con la suficiente transparencia y claridad apoyados en todo momento en la legalidad.

Este objetivo es posible alcanzarlo en la medida, en que no se pierdan de vista las desigualdades económicas y sociales que se viven en todo el territorio nacional, reconociéndose la ubicación geográfica de la población pobre y marginada que existe en nuestro país. Porque la pobreza y la marginación así como la deficiente educación obstaculizan una verdadera practica democrática, quizás con mayor relevancia en las zonas rurales. En donde de forma más descarnada se observan con mayor rudeza las desigualdades ciudadanas.

Son las zonas rurales del país las que menor participación ciudadana reflejan en la organización de los procesos electorales, en donde además la manipulación de las elecciones así como la integración de los órganos electorales son frecuentemente controlados por camarillas o grupos que tradicionalmente se encargan de obstaculizar la participación ciudadana.

Existen datos que nos permiten sustentar esta situación, en este caso podemos citar lo que señala el investigador Julio Boltvinik al respecto; “ En el medio rural, en las localidades de menos de 2 mil 500 habitantes, casi toda la población es pobre (98.1 por ciento), mientras que en las áreas urbanas se encuentran en esta condición 83 por ciento de las personas.” Datos a nivel nacional en el año 2000 y continúa haciendo un comparativo. En Chiapas casi el 80 por ciento de la población es indigente, proporción que disminuye rápidamente hasta menos del 15 por ciento en Nuevo León. (ECONOMIA MORAL. Julio Boltvinik. La Jornada . 28 de agosto del 2002).

La existencia de 54 millones de pobres en nuestro país, significa que evitemos de forma honesta, equipararnos como país con las democracias avanzadas del resto del mundo. Además, un universo de mil 954 municipios de alta y muy alta marginación, con 9 de cada 10 mexicanos extremadamente pobres que viven en el campo, así como la disminución de montos presupuestales para la educación que paulatinamente ha decrecido, observándose que el porcentaje del PIB destinado en 1994 a la educación de 5.2 por ciento, en el 2000 se redujo a 4.8 por ciento. Teniéndose como consecuencia que en los municipios más pobres el analfabetismo sea del 37 por ciento, promediándose una escolaridad entre sus habitantes de tercer año de primaria. Nos impiden hablar de un ejercicio democrático que en igualdad de condiciones se observa en los países avanzados

Tal situación en el país es tema de otro análisis, al mencionarla no pretendemos profundizar o hacer un examen exhaustivo. Sin embargo son datos que es necesario tener en mente para lograr situar la participación ciudadana en el contexto social que se vive en nuestro país.

La democracia necesita de pluralidad, de consensos en donde la soberanía popular sea la que defina los acuerdos sociales. Pero en la democracia se necesitan también una distribución equitativa de los recursos económicos, que se traduzca en mejores condiciones de vida que permitan a los ciudadanos acercarse a la igualdad social.

Este fenómeno es tan relevante que, aún en los países cuyas democracias son avanzadas el retroceso en las condiciones económicas que les permitan a los ciudadanos mantener buenas condiciones de vida y por lo tanto los elementos para competir en igualdad. Crea ambientes propicios para que la participación ciudadana sea menor y con ello la democracia se vea amenazada (un ejemplo ilustrativo, lo fueron las pasadas elecciones en Francia) en donde la apatía traducida en el abstencionismo, puso en riesgo la democracia en el país más representativo de Europa. Lugar en donde la grave situación económica que sufren los ciudadanos, ocasionó que los procesos electorales fueran tomados con poco interés e indiferencia. Creándose una peligrosa situación social que puso en aprietos al régimen democrático francés, con la amenaza real de que pudiera llegar a ocupar el poder el dirigente Jean Marie Lepent de ideología neofascista.

En nuestro país en los tiempos que actualmente vivimos ¿Qué representan la falta de información y formación política en las decisiones que los ciudadanos toman en relación con las elecciones? Significan un serio obstáculo para la democracia, porque sin ellas la sociedad ve limitadas sus opciones de participación.

Sin embargo, aún con estas limitaciones para nadie es un secreto que los avances que hemos tenido en el país con respecto a la ciudadanización de los órganos electorales, representan un progreso democrático. Sin olvidar que estos avances para llegar a la democracia en transición en la que actualmente nos encontramos, se apoyan en una larga historia de movimientos sociales como expresión de la presión ciudadana.

A partir de la década de los setenta con las primeras reformas a las leyes electorales promovidas por Reyes Heróles, otorgándose más participación en las cámaras legislativas a los partidos de oposición, buscándose con estas reformas reducir la supremacía de un solo partido. Intentándose a su vez con ellas disminuir la presión que ejercían amplios sectores sociales mediante la movilización, en demanda de una mayor apertura democrática que les permitiera ampliar su participación en la integración de los órganos electorales, buscando asegurarse de este modo el respeto a su voluntad durante las elecciones.

Esta presión social se dio de distintas maneras, desde movimientos locales hasta movilizaciones sociales de carácter nacional. El movimiento ferrocarrilero de Demetrio Vallejo y Valentín Campa en los años cincuenta, el movimiento médico del 64, el gran movimiento estudiantil del 68 cuyas consecuencias derivaron en un parteaguas en la historia política de nuestro país, y uno muy significativo el movimiento navista en el estado de San Luis Potosí encabezado por el Dr., Salvador Nava. Estos movimientos tuvieron como consecuencia obligar al gobierno a otorgar mayores espacios de participación ciudadana en los procesos electorales.

Puntualizando, las reformas electorales de los años setenta dieron pie, acompañadas por la presión ciudadana a lograr que los órganos electorales cuenten con la legitimidad que actualmente tienen, así como la independencia del gobierno. El IFE, integrado por ciudadanos cuya honestidad y participación social era su mejor recomendación, es hoy en día resultado de estos cambios. Extendiéndose la legitimidad y

la independencia avaladas por los ciudadanos al Tribunal Federal Electoral, a los Tribunales Electorales en los estados, así como a las Comisiones Estatales Electorales. Todos identificados entre sí, por el común denominador de estar integrados por ciudadanos honorables y salidos de la sociedad de forma directa sin estar empujados o avalados por quienes ostentan en poder. Esta situación producto de la participación social por tener elecciones democráticas y confiables.

La nueva integración de los órganos encargados de organizar las elecciones se tradujo en una mayor confianza de los ciudadanos en los procesos electorales, dando mayor respaldo a los resultados de las mismas. Es decir otorgando una verdadera legitimidad a quienes son electos, lograrlo hubiese sido muy difícil sin la ciudadanización de los órganos electorales.

Sin embargo, no basta con lo avanzado existen aún serios problemas para ampliar la participación ciudadana, sobre todo en los lugares en donde no existe una educación adecuada y las condiciones de pobreza son agudas. Esta es una asignatura pendiente, que debe ser afrontada con seriedad y prontitud por el conjunto de los integrantes de la sociedad; gobierno, partidos políticos y órganos electorales.

Una parte significativa de este serio problema lo representan aquellos lugares de gran marginalidad en donde las Comisiones Municipales Electorales, así como la integración de los funcionarios de casillas durante los procesos electorales, aún, en muchos de los casos se integran por personas que comúnmente y durante mucho tiempo han acaparado tales puestos.

Es decir la democracia aún no aterriza en esta parte medular de los procesos electorales. Porque la organización y participación en estos puntos básicos del proceso electoral para un ejercicio pleno de la democracia, todavía no han sido plenamente ciudadanizados (no hablo de la legalidad establecida para ello, procesos de insaculación, etc.) sino que a pesar de todos los cambios existentes hoy en día para ciudadanizar plenamente tales órganos electorales, es necesario insistir en elevar los niveles de educación y de mejorar las condiciones económicas para lograr la mayor participación posible. Es decir en la medida en que los ciudadanos salven estos obstáculos, su participación impedirá que sean los grupos caciquiles corporativos y clientelares, quienes manipulen los procesos en beneficio propio o de un determinado partido.

Podrá decirse que los mecanismos de insaculación para la selección de ciudadanos que integran las casillas es un avance, lo cual es cierto porque es un elemento que impide prácticas viciadas en el momento de integrarlas. Sin embargo es sabido también que muchos ciudadanos al conocer la información que les indica que han sido elegidos para desempeñar actividades de funcionario de casilla o para integrar algún órgano electoral, rechazan en muchos de los casos tales responsabilidades. Como resultado de la falta de información y formación política y, de una educación deficiente.

Además ante la inexistencia de una cultura política y democrática arraigada en nuestra sociedad que permita a los ciudadanos comprender que su participación en los asuntos políticos, que de muchas maneras influyen en sus formas de vida, provoca que aumente su indiferencia con respecto a toda actividad relacionada con la política y por ende hacia las elecciones.

Ahora bien, ¿Es suficiente con la existencia de leyes y reformas que le dan a los ciudadanos la oportunidad de una amplia participación en la organización de los procesos electorales? ¿Aumentar el nivel de educación y mejorar las condiciones económicas de los ciudadanos favorece la ciudadanización de las elecciones? la respuesta es no a la primera pregunta y sí a la segunda, porque sin las condiciones de igualdad social (económicas, educativas) el estado de derecho no es suficiente por sí solo para apuntalar

la construcción de una cultura democrática que permita una amplia participación ciudadana en los procesos electorales. Necesitamos como sociedad no solo combatir la desigualdad social con sus graves consecuencias, debemos arraigar entre nosotros una cultura democrática. Es decir la sociedad debe ser capaz de arraigarse en una dinámica que tenga como base fundamental el ejercicio democrático ciudadano permanente en igualdad de condiciones. Para ello es necesario que la sociedad se deshaga de lo nocivo e inútil del viejo régimen y construya uno nuevo digno y viable, para lograrlo se necesita que la presión ciudadana sea permanente.

El respeto de todos los actores políticos y sociales, partidos políticos, organizaciones empresariales, integrantes de la academia, líderes de opinión, ONG's hacia los órganos electorales que a lo largo de mucho tiempo han podido construirse, es otro elemento cardinal para la participación ciudadana. Porque los órganos electorales no solo necesitan del arropamiento legal, sino que para que su vigencia sea real es fundamental la legitimidad que les ofrezcan todos los integrantes sociales. Cuando la legitimidad social no esta plenamente volcada sobre los órganos electorales, la vulnerabilidad en que pueden caer estos, puede traducirse en un factor de retroceso democrático.

Sí, partimos de lo anteriormente expuesto nos damos cuenta de la enorme complejidad que representa la participación ciudadana en las elecciones, porque no basta con el solo hecho de que los ciudadanos acudan a votar para elegir a sus gobernantes. No, el asunto tiene mucho más de fondo. Necesitamos que esta participación de los ciudadanos se transforme en una verdadera cultura democrática, cuyo objetivo es que la democracia realmente sea plena, es decir que la democracia sea tanto participativa como representativa, este objetivo elemental para el buen funcionamiento de la sociedad solo se logra cuando; la pobreza, la marginalidad, la educación deficiente, la mala distribución de la riqueza y la ilegalidad sean francamente resueltos de tal manera que permitan la prevalencia de una cultura democrática, basada en la igualdad social de la que carecemos.

Los vientos nuevos que actualmente se viven de cambio político en el país, con la alternancia en el gobierno, dan cuenta de la enorme capacidad de movilización y de disposición a transformarse de la sociedad cuando así se lo propone.

La alternancia en el poder que actualmente se vive en el país representa la voluntad que los ciudadanos expresaron para construir una sociedad más democrática y la confianza en las elecciones. Sin embargo el desencanto hacia la democracia puede hacerse presente, cuando el ciudadano común percibe que no basta únicamente con el hecho de votar, para que sus condiciones de vida mejoren.

El ciudadano común ha tomado conciencia de que no es suficiente para sus intereses que únicamente lo tomen en cuenta cuando es necesario su voto, porque observa el frecuente incumplimiento de las promesas hechas durante la campaña de quienes pretenden el poder, esta actitud representa un revés a sus deseos de mejorar sus condiciones de vida al decidirse por tal o cual candidato.

Por consiguiente aislar la participación de los ciudadanos en las elecciones del amplio contexto social, no tiene sentido alguno. Hablar de lo bien que pueden organizarse los procesos electorales, de su transparencia, de su limpieza pierde valor sino se considera que los procesos electorales significan entre otras cosas el deseo ciudadano por mejorar sus condiciones de vida.

Quienes pregunten al ciudadano común su opinión sobre los procesos electorales muchas de las veces reciben como respuesta; que sentido tiene cumplir con un derecho ciudadano sí, quienes llegan al poder no lo toman en cuenta al ejercer el gobierno, porque jamás vuelven a preguntarle su opinión.

Esto ha obligado a muchos ciudadanos que viven en los lugares de mayor marginación a cotizarse. Que significa esto, significa que los ciudadanos sumidos en condiciones de pobreza y marginación que no cuentan con una educación suficiente transforman lo que debiera ser un acto de moral social que es votar de manera consciente, en un acto de mercantilismo vergonzante, deciden ofrecer su voto a quien más les ofrezca durante las campañas (despensas, lotes de terreno, empleo, etc.) transformando lo que debiera ser un ejemplo de soberanía popular en una mera compra de conciencias.

En este sentido durante muchos años en nuestro país tales practicas se han ejercido, y representan parte de las viejas estructuras que estamos obligados a cambiar.

Por otra parte llegar a nuestro objetivo de hacer de las elecciones un acto de gran valía democrática y de calidad moral social es un reto que necesita del empeño de todos, pero en esta tarea quienes juegan un papel preponderante, son los actores políticos más importantes; los integrantes del poder político, los partidos políticos, los organismo sociales y del empeño mismo de quienes actúan directamente en los órganos electorales.

Si, no existe una voluntad de claridad y transparencia en quienes son gobierno, por promover la participación ciudadana en las elecciones y su organización, difícilmente llegaremos a tener éxito. No hablo en ningún momento de la buena voluntad de nuestros gobernantes, esto no existe, es necesario que los ciudadanos continuemos empujando para obligar a que nuestra voluntad se cumpla.

Igual sucede con los partidos políticos, en toda democracia su existencia es fundamental, porque la pluralidad que estos representan es sostén de la misma. Sin embargo en la medida en que estos no logren cumplir con su papel real y motivo de su existencia, que es el de representar la voluntad y los intereses de la sociedad y no como sucede muchas veces en los hechos, de indicarle a la sociedad y a los ciudadanos que tareas deben realizar, su existencia puede ser cuestionada y en caso necesario por decisión de la sociedad pueden ser rebasados. Por lo tanto si es voluntad ciudadana legitimar a los órganos electorales, los partidos políticos deben ser muy cuidadosos al momento de cuestionar a dichos órganos. El estado de derecho les permite la critica, ante este hecho la sociedad es respetuosa, por lo tanto si pretendemos arraigarnos en la democracia, es necesario la permanencia de equilibrios.

Nuestra sociedad debe ser capaz con la participación general de los ciudadanos, gobierno, actores políticos, partidos políticos, en forma real sin crear expectativas fantasiosas abocarse a construir la cultura democrática que facilite la mayor participación ciudadana en las elecciones. Cualquiera de estos integrantes de la sociedad que no cumpla con su papel puede ocasionar que la democracia se retrase.

En el empeño democrático debemos tener cuidado en un punto básico, si el gobierno o quién ostente el poder no cumple con su obligación de buscar los equilibrios adecuados para la amplia participación ciudadana en los procesos electorales, sin paternalismo ni buenas voluntades, sino solo cumpliendo con su función buscando acabar con las desigualdades sociales, logrando una mejor educación de los ciudadanos, acabando con la pobreza y la marginación, respetando el estado de derecho, la participación de los ciudadanos en los procesos electorales será muy difícil de lograrse.

La historia en nuestro país esta plagada de muy buenas intenciones ciudadanas con el objetivo de ampliar su participación en las elecciones, sin embargo quienes ostentan el poder no han estado a la altura de estas expectativas. Los movimientos sociales ocurridos en nuestro país dan muestra de esta gran contradicción.

Baste recordar que durante los inicios del siglo pasado perdieron la vida muchos mexicanos luchando por lograr el anhelo de que su voluntad fuera respetada precisamente

al expresar su voto y exigir mayor participación en la organización de los procesos electorales, como ocurrió durante el año de 1910. Sin embargo esta legítima aspiración fue truncada de manera cruenta por quienes ostentaban el poder, las consecuencias de este hecho histórico fueron muchas; además, de la pérdida de vidas de un gran número de ciudadanos y el desmantelamiento de las viejas estructuras de control político. Al final de la contienda social los vencedores que se erigieron como los nuevos gobernantes en sentido contrario de lo esperado volvieron a practicar lo que combatieron, la manipulación de los procesos electorales.

Una casta nueva de gobernantes y caudillos al ser triunfadores se apoderaron, no solo de las riendas del gobierno sino que durante muchos años manejaron a su antojo los procesos electorales para poder sostenerse en el poder, retrasando con ello la instauración de un régimen democrático y, originando el alejamiento de la participación ciudadana de la organización de las elecciones, asentándose la indiferencia de un amplio sector de la sociedad hacia todo aquello que se relacionara con la política.

Las consecuencias naturales de estos hechos estuvieron presentes durante largos periodos de tiempo, en los que las elecciones y por ende su organización se realizaron sin una participación democrática de los ciudadanos, perdiendo estos procesos su legitimidad, transformándose en solo un trámite para que un mismo grupo continuara en el poder.

En la democracia en transición que actualmente estamos viviendo en nuestro país, lo anterior ya no puede volver a suceder, por lo tanto la cultura democrática que produce un régimen democrático es fundamental para que la participación ciudadana en los procesos electorales sea una norma, este y no otro es el verdadero camino que como sociedad debemos andar. En un régimen democrático los ciudadanos tenemos el derecho de que nuestra participación sea facilitada, debemos arribar a ella para que nuestra participación en ningún momento sea impedida.

Por lo tanto es necesario que a través de la presión social nos opongamos a que los procesos electorales y su organización sean controlados por quienes ostentan el poder, por los actores políticos, por los partidos políticos, en una palabra necesitamos que los procesos electorales sean verdaderamente ciudadanos. Esta es la única forma de asegurarnos que la democracia se consolide entre nosotros, además es necesario entender que somos los ciudadanos quienes debemos defender a toda costa los órganos electorales constituidos y vigentes en la actualidad (IFE, TRIBUNALES FEDERALES Y ESTATALES ELECTORALES, COMISIONES ESTATALES ELECTORALES, COMISIONES MUNICIPALES ELECTORALES, ETC) porque su independencia ha costado, vidas, tiempo y muchos esfuerzos. Para ello es fundamental evitar que quien ostenta el poder, o quienes participan en los procesos electorales como candidatos a ocupar órganos de gobierno, o los partidos políticos controlen o puedan apropiarse de las elecciones.

Si, nuestro país no avanza por el sendero de la democracia plena al consolidar un régimen democrático, en donde la norma sea el respeto absoluto a los ciudadanos y sus derechos, en todo momento por quienes nos gobiernan, cumpliendo además con su función elemental de abatir los obstáculos que nos impiden una participación amplia y permanente en los procesos electorales, buscando terminar con las desigualdades sociales estableciendo equilibrios económicos capaces de abatir la pobreza y la marginación de muchos millones de mexicanos, así como elaborando políticas educativas que realmente aumenten el triste promedio de tercer año de primaria que existe en nuestro país y eliminando la gran brecha que aún existe en nuestra sociedad entre pobres y ricos. Dificilmente se podrá lograr una participación ciudadana en los procesos electorales, similar a la que se ha logrado construir y ya existe en los países con democracias consolidadas.

Es imperativo que en nuestro país no solo existan las leyes que nos permitan organizar las elecciones y votar en ellas por quien nosotros queramos, necesitamos vigorizar una cultura democrática que estimule la participación ciudadana permanente, que logre que los ciudadanos participen activamente no solo durante los procesos electorales sino que se interesen por los asuntos políticos que de una u otra forma influyen sobre sus vidas. Que esta cultura democrática nos permita mantener la atención permanente sobre el acontecer político cotidiano. No estamos hablando ni mucho menos pretendemos que todos los ciudadanos se conviertan en políticos profesionales o avezados analistas políticos, no de lo que se trata es de que mantengamos nuestra dignidad ciudadana y estemos pendientes mediante nuestra participación de que el camino democrático sea caminado.

Resumiendo, la participación ciudadana en la organización de las elecciones debe ser entendida como un ejercicio democrático que en toda sociedad tiene una correlación muy estrecha con otros elementos sociales fundamentales, sería un grave error hablar de la participación de los ciudadanos en sus elecciones de forma individual o aislada. Por lo tanto separar a las elecciones del ejercicio de gobierno, de las condiciones de marginación y pobreza de los ciudadanos, de la existencia de una educación deficiente que impide aún en nuestro país, sobre todo en los municipios que viven en condiciones de grave marginación (no debemos olvidar que existen 54 millones de mexicanos pobres) a muchos ciudadanos hombres y mujeres, tomar decisiones razonables sobre su actuar ante situaciones de carácter electoral y político, sería un grave error. Existiendo además el riesgo de que sin una educación adecuada la manipulación de las conciencias sea una amenaza permanente. El estado de derecho con leyes que respalden los derechos de los ciudadanos, la búsqueda y el establecimiento de los equilibrios sociales y económicos en el de ejercicio de gobierno que nos permitan una igualdad social, abatiendo las grandes diferencias entre los que mucho tiene y los que nada tienen, son puntos fundamentales que en su conjunto deben resolverse para que podamos ampliar y consolidar la participación ciudadana en las elecciones.

INTRODUCCIÓN.

Sí, bien es cierto que las elecciones representan una de las expresiones más importantes de la soberanía popular y del ejercicio democrático encaminado a la construcción de un régimen democrático. Al igual que la organización e integración de los órganos electorales, no pueden entenderse como un acto aislado del contexto social.

Un régimen democrático no solo se construye y se consolida con la existencia de un estado de derecho, necesita también que los ciudadanos tengan las condiciones de vida que les permitan una participación consciente y amplia, que no existan desigualdades sociales.

Con más de 54 millones de pobres que habitan en nuestro país, cuyos niveles de educación promedian el tercer año de primaria, es difícil que hablemos de una amplia participación ciudadana en las elecciones de manera consciente, razonada.

La pobreza y marginación que se concentra en poblaciones localizadas en zonas rurales con menos de 2 500 habitantes y los cinturones de miseria de las grandes urbes, son un elemento que nos impide compararnos con las democracias de países avanzados.

La desigualdad social que prevalece en este amplio sector de nuestra sociedad es un freno, que limita en los ciudadanos sumidos en la pobreza cumplir en muchas de las veces con un acto de la más alta calidad moral como lo es el de votar de forma voluntaria para elegir a quien conscientemente se desea que los gobierne.

La voluntad social por lograr condiciones de vida mejores existe, la alternancia en el poder lo demuestran, terminar con una larga historia de manipulación ciudadana es hoy en día aún una asignatura pendiente.

Es cierto, el estado de derecho da confianza al ciudadano de que su voluntad será respetada, por ello la legitimidad que le brinda a los órganos encargados de organizar las elecciones, les ha permitido a estos gozar de la autonomía que las leyes les dan.

Las elecciones representan para los ciudadanos la esperanza de mejorar sus condiciones de vida, su participación será mayor en la medida en que estas realmente le permitan disfrutar de una vida mejor.

BIBLIOGRAFÍA.

Boltvinik Julio, Economía Moral. Geografía de la Pobreza en México. La Jornada, 28 de agosto del 2002.

Cosío Villegas Daniel, El Sistema político mexicano. Cuadernos de Joaquín Mortiz. 1981.

Granados Chapa Miguel Ángel, Para no perder el poder. Plaza Pública. El Norte, 22 de septiembre de 2002

Gilly Adolfo, La revolución Interrumpida. Ediciones el Caballito, 1975.

Meyer Lorenzo, Desmontar el régimen. El Norte. 4 de febrero del 1999.

Meyer Lorenzo, Escándalo. El Norte. 22 de agosto del 2002.